



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 04 MAR 2020

AUTO INTERLOCUTORIO No. 73

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-006-2018-00620-00
DEMANDANTE:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEMANDADO:	HUMBERTO ZUÑIGA
ASUNTO	DECRETA MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISION

El Despacho resolverá la solicitud de medida cautelar formulada por Colpensiones, con la que pretende suspender provisionalmente las resoluciones nro. 1077 del 19 de enero del 2000¹ y nro. 2090 del 18 de julio de 2001², proferidas por el Departamento del Valle del Cauca, mediante las cuales se reconoció y reliquidó una pensión de jubilación.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, en razón a que, a su juicio, resultan contrarios al ordenamiento jurídico, pues al señor Humberto Zúñiga le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de jubilación anticipada por el Departamento del Valle del Cauca desconociéndose el hecho de que este ya había sido pensionado por jubilación por Emsirva en Liquidación, mediante Resolución nro. 009089 del 16 de agosto de 1985, que dispuso la incompatibilidad que su derecho personal tenía con el ejercicio de cualquier cargo público, con lo que se evidencia que el demandado percibe doble asignación del erario público, lo que está prohibido por el artículo 128 de la Constitución Política.

Añadió que dicho reconocimiento pensional ha causado un detrimento económico al Departamento del Valle del Cauca, y que el pago de una prestación sin el cumplimiento de los requisitos legales atenta contra el principio de estabilidad financiera del sistema pensional.

III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

El demandado argumento que no debe tenerse en cuenta la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los actos acusados, porque atenta contra el

¹ Ver folio 29.

² Ver pág. 9 del CD (fl. 25)



mínimo vital del señor Humberto Zúñiga por cuanto Colpensiones no lo ha ingresado en nómina de pensionados.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de las resoluciones nro. 1077 del 19 de enero de 2000 y nro. 2090 del 18 de julio de 2001 mediante las cuales se reconoció y reliquidó la pensión de jubilación anticipada del demandado, proferidas por el Departamento del Valle del Cauca, al ser incompatibles con la pensión de vejez reconocida de carácter compartido entre Emsirva EPS en liquidación y Colpensiones?

Para resolver el problema jurídico se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, la suspensión provisional, las medidas preventivas y luego se abordará el caso concreto.

4.2. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

- **LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:**

El artículo 238 de la Constitución Política establece:

“ARTICULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”

La Corte Constitucional, en sentencia C-834 de 2013, se pronunció respecto a la finalidad de las medidas cautelares, de la siguiente manera:

“(…) Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos



*serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...)*³.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en el artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “*proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia*”. Además, indicó que las medidas cautelares proceden: *i)* en cualquier momento; *ii)* a petición de parte debidamente sustentada, y *iii)* en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 230 del CPACA clasificó las medidas cautelares como: *i) preventivas* (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; *ii) conservativas* (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un *statu quo*; *iii) anticipativas* (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante, y *iv) de suspensión* (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las medidas cautelares enunciadas en el artículo 230.

Para mayor claridad, el Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento⁴, esquematizó la clasificación de los requisitos de las medidas cautelares, así:

“Requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal y de índole material, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES		
	DE ÍNDOLE FORMAL	Debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 229, Ley 1437 de 2011)
		Debe existir solicitud de parte ⁵ debidamente sustentada en el texto de la demanda o en

³ Corte Constitucional, Sentencia C-834/13. Referencia: Expediente D -9509. Demandante: Martín Bermúdez Muñoz. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 613 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

⁴ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, providencia del siete (07) de febrero de dos mil diecinueve (2019), rad: 05001-23-33-000-2018-00976-01 (5418-2018).

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado
Asunto

: 2018-00620-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
: HUMBERTO ZÚÑIGA
: DECRETA MEDIDA CAUTELAR



REQUISITOS DE PROCEDENCIA GENERALES O COMUNES		escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio (artículo 229, Ley 1437 de 2011).
	DE ÍNDOLE MATERIAL	La medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 229, Ley 1437 de 2011).
		La medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria entre la medida a decretar y las pretensiones de la demanda (artículo 230, Ley 1437 de 2011).

Requisitos de procedencia específicos, para decretar medidas cautelares, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

REQUISITOS PARA EL DECRETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES				
REQUISITOS DE PROCEDENCIA ESPECÍFICOS		SUSPENSIÓN PROVISIONAL	Si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, la cual puede surgir:	a) tras confrontar el acto demandado con estas
				b) tras confrontar, las normas superiores invocadas, con las pruebas.
			Si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios...	Además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios (artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011)
		Si se pretenden otras medidas cautelares		a) Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho;
				b) Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente la titularidad del derecho o de los derechos invocados;
				c) Que el demandante haya presentado

⁵ De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las “medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.



	diferentes a la de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado, deben concurrir los siguientes requisitos:	los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y
		d) Que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios (artículo 231, inciso 3°, numerales 1° a 4°, Ley 1437 de 2011).

• LA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA

Como se señaló en precedencia, conforme al artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares son preventivas (num. 4), conservativas (num. 1 primera parte) anticipativas o de suspensión (nums. 1 segunda parte, 2 y 3). En este orden de ideas, la norma enumera las posibles medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas.

La cautela negativa por excelencia es la suspensión provisional, cuando el objeto de control es un acto administrativo. Las cautelas positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la administración: hechos u operaciones administrativas, y dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo.

Respecto de las medidas preventivas, estas tienen por finalidad evitar que se configure un perjuicio o se vulneren los derechos del demandante⁶. La Ley 1437 del 2011 consagró, dentro los procesos contencioso administrativos, un procedimiento que tiene por finalidad evitar la inejecución de la sentencia, esto es, diseñó un proceso cautelar que se torna en instrumental del proceso principal⁷, que corresponde no solo a lo previsto en el artículo 238 de la Constitución Política sino también busca materializar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia⁸.

Así, las medidas cautelares preventivas buscan proteger la materialización de las decisiones judiciales, ya que permiten que el objeto del juicio permanezca inalterado durante el trámite del proceso, pues, de lo contrario, el restablecimiento del ordenamiento jurídico por medio de la sentencia sería puramente formal y no material.

⁶ Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia de 21 de mayo de 2015, radicación 11001-03-24-000-2013-00534-00
⁷ Gómez Aranguren, Gustavo. El régimen de medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011. En: Briceño de Valencia y Zambrano Cetina (Coord.) *Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011*. Banco de la República. Bogotá.
⁸ Constitución Política de Colombia:
Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.
Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.



Por ende, para su decreto se requiere que: (i) exista la apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas, es decir, que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados; (ii) que se efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, y (iii) que exista peligro para la efectividad de la sentencia, esto es, que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nugatorios⁹.

4.3. CASO CONCRETO:

Como se señaló en el cuadro normativo y jurisprudencial, en el examen de procedencia de la medida cautelar solicitada debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameritan la imposición de la cautela, a saber: a) confrontación del acto demandado con las normas superiores invocadas; b) confrontación de las normas superiores con las pruebas obrantes en el plenario, c) verificación de la violación de normas superiores frente a la existencia de un perjuicio.

En *sub lite*, el Departamento del Valle del Cauca sostiene que los actos administrativos demandados (cuya suspensión solicita) infringen el artículo 128 de la Constitución Política, y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, normas que, básicamente, prohíben la doble asignación del tesoro público y mencionan la incompatibilidad de las pensiones o asignaciones del sector público.

El Despacho advierte que, en efecto, al señor Humberto Zuñiga le fueron reconocidas las siguientes pensiones:

- La pensión de jubilación, otorgada por Emsirva EPS en liquidación como empleador (Resolución 009089 de 1985).
- La pensión de jubilación, otorgada por el Departamento del Valle del Cauca como empleador (Resolución 1077 de 2000), y que fue reliquidada (Resolución nro. 2090 de 2001).
- La pensión de vejez de carácter compartida, otorgada por Colpensiones (Resolución nro. GNR 146133 de 2016).

En dichos actos administrativos se dispuso lo siguiente:

RESOLUCIÓN 009089 DE 1985¹⁰

c) Que el Laudo Arbitral (...) numeral 9.1.1. establece un régimen especial para estos trabajadores al decir que: *“Emsirva jubilará a los trabajadores a que se refiere el numeral 9.1.8 al cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos al servicio de cualquier entidad de servicio público, sin tener en cuenta la edad,*

⁹ Ibid.

¹⁰ Ver folios 26 a 28

siempre y cuando hayan trabajado por lo menos diez (10) años al servicio del Municipio de Cali y Emsirva

Además establece que *“quienes hayan trabajado durante veinte (20) años continuos o discontinuos al servicio del Municipio de Cali y Emsirva, tendrán derecho a una pensión de jubilación equivalente al 100% de lo devengado en el último año de servicio”*.

d) Que en la Convención Colectiva de Trabajo de 1975 en su artículo 37 se estableció *“Que Emsirva jubilará a los trabajadores que pasaron de las Empresas Municipales a Emsirva, con el mismo régimen de jubilación de que habla el Laudo Arbitral de 1970”*.

e) Que el señor Humberto Zuñiga cumple con los requisitos antes enunciados y además fue traslado de Empresas Municipales a Emsirva.

(...)

ARTÍCULO TERCERO: Cuando al jubilado se le reconozca la pensión de vejez por el ISS, Emsirva sólo cancelará el excedente de esta, hasta completar el 100% de la pensión de jubilación que viene devengando.

ARTÍCULO CUARTO: Emsirva repetirá a Empresas Municipales de Cali para el pago de la cuota parte que asciende a la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESO CON 02/100 MCTE. (3.141.02).

ARTÍCULO QUINTO: Se advierte al jubilado que su derecho es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público, si sumados el sueldo y la pensión exceden de la suma de mil seiscientos pesos (\$1.600.00).

RESOLUCIÓN 1077 de 2000¹¹

Que el señor Zuñiga Humberto con cédula de ciudadanía nro. 14.954.895 solicitó a ésta Secretaria el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación anticipada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Convencional.

Que el Acuerdo de Revisión Convencional suscrito entre el Gobernador del Valle del Cauca y el Sindicato de Trabajadores, el día 24 de diciembre de 1999, en su numeral 2, cláusula 1ª literales a, b, c, d, f y g establecen la tabla de jubilación anticipada especial, que se liquidará con promedio salarial devengado en el último año de servicio aplicando a este valor el porcentaje establecido en dichas tablas.

Que la fecha de ingreso al Departamento del peticionario fue 3-Jun-88.

(...)

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y ordenar pagar a favor del señor Zuñiga Humberto con cédula de ciudadanía nro. 14954895 con cargo al Código nro.

¹¹ Ver folio 29



20001131000001610100000079 Pensiones y Jubilaciones del actual presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Institucional una pensión mensual vitalicia de jubilación anticipada por la suma de \$529.747 a que tiene derecho conforme al Acuerdo Convencional suscrito entre el Departamento y el Sindicato de Trabajadores del Valle del Cauca el 24 de diciembre de 1999 y se descontará el 12% mensual para el servicio médico, este porcentaje no será aplicado a la retroactividad cuando la hubiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si el valor reconocido es menor al salario mínimo legal correspondiente al año 1999 este será reajustado conforme a la Ley 100/93.

ARTÍCULO TERCERO: La Contraloría Departamental supervigilará lo concerniente a las incompatibilidades legales de que trata la Ley.

RESOLUCIÓN GNR 146133 de 2016¹²

ARTÍCULO PRIMERO: Dar estricto cumplimiento al fallo judicial proferido por Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, modificado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial el 5 de noviembre de 2014 y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de un pensión de vejez de carácter compartida, a favor del señor Zuñiga Humberto, en los siguientes términos y cuantías:

(...)

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201606 que se paga en el periodo 201607 en la central de pagos del banco Bancolombia.

(...)

ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:

Entidad	Días	Valor Cuota
Colpensiones	6925	\$689.169

ARTÍCULO SEXTO: Esta prestación económica es incompatible con cualquier otra asignación del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.

Revisados los actos administrativos enunciados se tiene lo siguiente:

A través de la Resolución nro. 009089 del 30 de septiembre de 1985, Emsirva ESP ordenó en favor del señor Humberto Zuñiga el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 16 de agosto de 1985. Dicho reconocimiento pensional se efectuó con base en la convención colectiva de 1975 que establecía que los trabajadores que pasaron de las empresas municipales a Emsirva se jubilarían con el mismo régimen de jubilación del que habla el laudo arbitral de 1970 vigente para aquella época.

¹² Ver CD

RADICACIÓN : 2018-00620-00
 Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
 Demandante : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 Demandado : HUMBERTO ZUÑIGA
 Asunto : DECRETA MEDIDA CAUTELAR



Con posterioridad, el Departamento del Valle del Cauca expidió la Resolución nro. 1077 del 19 de enero del 2000 que reconoció en favor del señor Humberto Zuñiga una pensión de jubilación anticipada, con fundamento en el Acuerdo Convencional suscrito entre dicha entidad y el Sindicato de Trabajadores. Dicha pensión fue reliquidada mediante Resolución nro. 2090 del 18 de julio de 2001.

Para tal efecto, se tuvo en cuenta que el demandado prestó sus servicios como vigilante de obras públicas en el Departamento del Valle del Cauca desde el 3 de junio de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1999, para un total de 11 años, 6 meses y 29 días.

Finalmente, con la expedición de la Resolución nro. GNR 146133 del 18 de mayo de 2016, Colpensiones ordenó en favor del señor Humberto Zuñiga el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, para dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali modificado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Primera de Decisión Laboral. Ese acto administrativo dispuso el reconocimiento de la pensión de carácter compartida con Emsirva ESP en Liquidación como empleador.

A continuación se citan algunas de las normas que considera infringidas la parte solicitante de la medida cautelar:

Prohibición de percibir doble asignación del Tesoro Público.

La Constitución Política en el artículo 128 consagra la prohibición expresa de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público, lo que reitera lo contenido en la Constitución de 1886, en los siguientes términos:

"(...) Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas (...)".

En concordancia, el artículo 19 de la Ley 4° de 1992¹³ derogó de forma tácita el artículo 1 del Decreto 1713 de 1960¹⁴, y dispuso:

¹³ "Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones"

¹⁴ "Artículo 1°.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación: (...)".



"(...) Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:

- a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;*
- b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;*
- c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;*
- d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;*
- e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;*
- f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;*
- g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley benefician a los servidores oficiales docentes pensionados.*

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades (...)"¹⁵

De la normatividad que regula el tema se desprende la imposibilidad de acceder a dos asignaciones del sector público, salvo en los casos excepcionales allí contenidos.

Ahora bien, el Consejo de Estado¹⁶ se ha referido a la incompatibilidad de devengar simultáneamente dos pensiones, una de jubilación y otra de vejez salvo que ésta última sea resultado de servicios prestados a empleadores particulares.

En concreto, ha precisado lo siguiente:

"De lo anterior se concluye que es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS siempre que ésta se reconozca por servicios prestados a patronos particulares.

No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el Instituto del Seguro Social incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado" y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público"¹⁷. (Negrilla fuera de texto)

¹⁵ Artículo declarado exequible por la Corte Constitucionalidad en Sentencia C-133 del 1º de abril de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

¹⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: **ALFONSO VARGAS RINCON**, providencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), dentro del proceso identificado con la radicación número: 25000-23-25-000-2009-00274-01(2297-11)

- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: **WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ**, sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dentro del proceso identificado con la radicación número: 25000-23-42-000-2014-00898-01(2034-16).

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: **SANDRA LISSET IBARRA VELEZ**, sentencia proferida el diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), dentro del proceso identificado con la radicación número: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13).



RADICACIÓN : 2018-00620-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Demandado : HUMBERTO ZÚÑIGA
Asunto : DECRETA MEDIDA CAUTELAR

Así entonces, en la actualidad, el demandado devenga tres pensiones de carácter público, esto es, la reconocida por Emsiva ESP a través de la Resolución nro. 09089 de 1985, la Resolución nro. 1077 de 2000 reliquidada mediante Resolución nro. 2090 de 2001, por el Departamento del Valle del Cauca, y la reconocida por Colpensiones mediante la Resolución nro. GNR 146133 de 2016, la cual fue reconocida por el juez laboral bajo la figura de la compatibilidad.

En consecuencia, es evidente para esta Corporación que el señor Humberto Zúñiga se encuentra devengando tres pensiones financiadas con recursos provenientes del Estado, circunstancia que da lugar a acceder a la medida cautelar solicitada por el Departamento del Valle del Cauca, en aras de proteger la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Finalmente, es preciso aclarar que conforme a lo estipulado en el artículo 229 del CPACA, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

En consecuencia, se

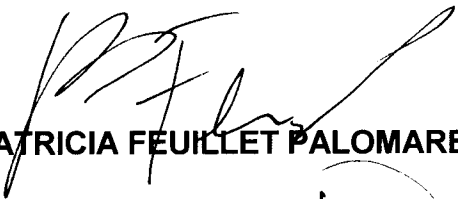
RESUELVE

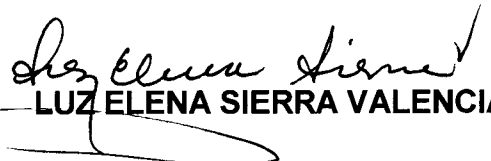
DECRETAR la suspensión provisional de la Resolución nro. 1077 del 19 de enero del 2000, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación anticipada al señor Humberto Zúñiga y de la Resolución nro. 2090 del 18 de julio de 2001, por medio de la cual se reliquidó dicha pensión de jubilación.

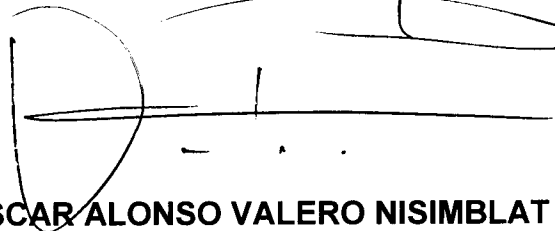
Notifíquese y Cúmplase.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha ()¹⁸

Los Magistrados,


PATRICIA FEULLET PALOMARES


LUZ ELENA SIERRA VALENCIA


OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

¹⁸